

EDITORIAL

Inoperancia pública en el fuego de Seseña

El incendio en el mayor vertedero de neumáticos de Europa destapa la desidia e incapacidad de la Administración pública, que se ha limitado a litigar con el promotor, pero sin zanjar el problema

HA tenido que ocurrir un siniestro para destapar las vergüenzas de la Administración pública, aunque sin las trágicas consecuencias de la avalancha del pabellón Madrid Arena, en la que murieron cinco chicas. El incendio del gran vertedero de neumáticos de Seseña-Valdemoro, a caballo de las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, y donde se almacenaban cerca de 100.000 toneladas en casi 12 hectáreas de terreno, fue el fruto de la desidia de las administraciones competentes, que desde hace años conocían el grave riesgo medioambiental que representaba esta instalación y que no fueron capaces de prevenir el siniestro. Esos depósitos, además de ser bombas contaminantes si se incendian –desprenden hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos–, son vivero de parásitos. Una de las medidas recomendadas en África para combatir el zika es acabar con los vertederos de neumáticos, donde el mosquito tigre se reproduce intensivamente. En 2003, la Comisión Europea declaró ilegales los almacenes de neumáticos al aire libre, y la prohibición rige en España desde 2006, pero ya en 2005 se estableció la obligación de reciclar las ruedas usadas por parte de los fabricantes, para lo que se creó un canon que pagan los consumidores. Sin embargo, de las 300.000 toneladas de neumáticos desechados que se generan en España al año, más de 100.000 terminan en paradero desconocido, lo que permite imaginar que existen un fraude y un vertido ilegal del que nadie se ocupa. El vertedero de Seseña, a un paso de la urbanización de *El Pocero* llamada El Quiñón, constituía un riesgo evidente, por lo que el propietario fue multado por las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, e incluso fue condenado y enviado a prisión. Pero los neumáticos siguieron en su sitio, y los responsables se hallan hoy en paradero desconocido. Cuando existe un riesgo para la población, como en este caso, no basta con que los responsables públicos se limiten a litigar. Han de actuar contra el promotor, pero subsidiariamente deben moverse con diligencia para eliminar peligros, sin perjuicio de endosar los gastos a quien corresponda. Algo que no se produjo en Seseña, donde la desidia debería acarrear responsabilidades políticas o de otro tipo.

Si el depósito era un riesgo para la población, debería haberse erradicado

APUNTES

Dos caras de las pensiones

La pensión media de jubilación ha experimentado en Navarra un crecimiento del 63% en los últimos diez años, hasta el punto de que muchos jubilados cobran más que miles de trabajadores en activo. Una situación anómala que, por fortuna, ha servido para que muchas familias pudieran campar mejor la crisis. No han sido pocos los parados que han vivido gracias al apoyo económico de sus mayores. Tampoco se puede olvidar que la bonanza llega a su fin y las pensiones se derrumbarán si no se toman medidas para sostener un sistema sin futuro.

Los jueces piden medidas

El juez Pablo Ruz enumeró en su visita a Pamplona algunos de los cambios que se necesitan para la lucha de forma más efectiva contra la corrupción. La reforma del Código Penal, el amparo del delator, la supresión de los aforamientos, medios técnicos y personales, la cooperación institucional e internacional, entre otros. Sin embargo, a los partidos, metidos ahora de lleno en una campaña electoral, no se les oye un solo compromiso concreto para hacer frente a esa lacra. Salvo descalificar al contrario, no plantean medidas en consonancia con los jueces.

El autor señala que no puede haber salida definitiva de la crisis sin que las empresas marchen bien. Para ello, el Gobierno debe rectificar su política

Recuperar la confianza empresarial

Miguel Canalejo



EL Indicador de Confianza Empresarial, que publica trimestralmente el INE, recoge las opiniones de gestores de empresas sobre la marcha general de su negocio. Los resultados más reciente sobre Navarra supusieron un toque de atención: la confianza empresarial aún no ha recuperado los niveles de finales de 2015. A este dato se suman otros dos publicados recientemente. Uno, el de la Cámara de Comercio de Navarra, que indica que las expectativas de las empresas navarras empeoran para 2016. El otro, el del informe "Perspectivas España 2016" de KPMG, que concluye que solo el 19% de los navarros considera que la evolución a 12 meses va a ser positiva, frente a otras regiones con más del 60% de optimistas.

Que los empresarios navarros tengan una visión tan negativa sobre el futuro de Navarra es, en parte, un diagnóstico basado en su percepción de la realidad de cada día. Que exista una falta de confianza en el futuro refleja, además, su hipótesis sobre lo que esperan de los que nos gobiernan. Este hecho es preocupante porque la confianza de los empresarios es un elemento esencial para generar prosperidad co-

lectiva y garantizar el desarrollo sostenible de Navarra. No hay ningún país desarrollado, innovador y competitivo en el que no haya un alto grado de confianza, tanto de los ciudadanos hacia sus instituciones, como entre los distintos sectores de la sociedad.

No puede haber una salida definitiva de la crisis sin que las empresas marchen bien y generen puestos de trabajo. El paro registrado en Navarra es nuestro principal problema, y no ha descendido en los últimos nueve meses. Hay que recordar que el 80,6% de los empleos lo genera la empresa privada por lo que, si ésta no tiene confianza en el futuro y reduce sus inversiones, nuestro inaceptable nivel de paro corre el riesgo de convertirse en estructural, con nefastas consecuencias para la convivencia, las cuentas públicas, la igualdad y el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, es fundamental tomar acciones que permitan recuperar la confianza empresarial.

En primer lugar, el Gobierno Foral debe rectificar su política fiscal, que coloca a Navarra, a sus empresarios y a sus ciudadanos en una peor posición competitiva respecto al resto del Estado. Es muy probable, además, que la mayor presión fiscal sobre el ahorro, el trabajo de los ciudadanos y los rendimientos empresariales no se vaya a traducir en una mayor recaudación, y corremos el riesgo de que perjudique el consumo y la inversión.

En segundo lugar, el gobierno de Navarra tiene que demostrar una mayor determinación en la eliminación del déficit público. Es decepcionante ver que éste aumentó el año pasado al 1,28% del PIB regional, superando el objetivo nacional del

0,7% y empeorando sobre los resultados alcanzados por el anterior gobierno en el 2014, del 0,85%. Resulta especialmente alarmante este problema en un año de fuerte crecimiento económico, del 2,9% a nivel regional y del 3,2% a nivel nacional. Si no somos capaces de cumplir nuestros objetivos de déficit en un entorno económico especialmente favorable, sin inflación, con dinero barato y abundante y cambio del euro favorable, lo que se traslada a la sociedad es que, cuando la coyuntura sea más desfavorable, lo que nos esperan son más subidas de impuestos.

Se han paralizado inversiones clave para el futuro como el Canal de Navarra y el tren de Alta Velocidad, pero la dotación de infraestructuras es un elemento esencial para el desarrollo económico, la creación de empleo y para generar avances en la competitividad, en el bienestar y en la cohesión territorial. Y el recurso a la deuda tiene un límite. Navarra ha multiplicado por cinco su deuda desde el comienzo de la crisis, desde 650 millones de euros a 3.300 millones al final del 2015. Hay que ser conscientes de que el coste de la deuda difícilmente será tan bajo como en este momento y, además, que para reducirla hay que generar en el futuro superávits fiscales continuados.

Todas las consideraciones anteriores nos llevan a constatar que, si hay que reducir el déficit, y no es factible aumentar los ingresos ni demorar inversiones, solo queda la desagradable tarea de reducir los gastos de la Administración, algo en lo que el Gobierno de Navarra no es ejemplar. Sirva como ejemplo la evolución del gasto de personal, que llegó en el 2015 a 1179 millones de euros, el 36,8% de lo recaudado en impuestos. Una cifra histórica que ha vuelto a alcanzar los niveles de antes de la crisis, lo que supone una enorme contradicción con los sacrificios que tanto familias como empresas han hecho durante estos años.

Finalmente, para recuperar la confianza de los empresarios creo que es necesario buscar todas las vías posibles para reforzar el diálogo entre el Gobierno de Navarra, las empresas y sus asociaciones representativas. Es imprescindible que las empresas vean por parte del Gobierno un apoyo claro, decidido y sincero, conozcan sus planes con antelación y tengan la oportunidad de ofrecer sus ideas al respecto. El destino de Navarra no está escrito y, como en el pasado reciente, la confianza empresarial en el futuro es un prerrequisito esencial para tener éxito en cualquier empeño colectivo que, como sociedad, nos proponamos, sobre todo el de desarrollo económico.

Miguel Canalejo Larraínzar es miembro del Consejo de Gobi

